Conferencia brindada por Marcelo Krikorian¹ en el *Foro Permanente de Fiscalías de Investigación y Oficinas Anticorrupción de la República Argentina.*

Santa Rosa, provincia de La Pampa, jueves 16 de mayo de 2024.

“Órganos garantes de transparencia e integridad: estándares y recomendaciones para robustecer su funcionamiento”

Buen día, en primer lugar agradezco la invitación que me hicieron desde la organización del Foro Permanente, para participar en la reunión que anualmente convoca a quienes, en diferentes ámbitos públicos, nacionales y provinciales, del sistema judicial, de los poderes ejecutivo y legislativo, trabajan cotidianamente por la transparencia y por la integridad.

Quiero asimismo destacar a quienes son anfitriones de este encuentro: la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa, a su Fiscal General Juan Carlos Carola, a la Fiscal Adjunta Gabriela Tabernero, a la Secretaria Letrada Cecilia Bertolé, y a todo el equipo de personas que allí trabajan, porque la organización ha sido impecable. Vayan también congratulaciones por celebrarse 20 años de la creación de la Fiscalía, y por la extraordinaria respuesta a la convocatoria para concurrir a esta reunión del Foro Permanente, por la cantidad de personas presentes, no registrada en años anteriores.

¹ Abogado, Magister en Derechos Humanos y Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Profesor de grado y posgrado e integrante de la Comisión de Grado Académico para carreras y cursos de posgrado en la mencionada universidad, facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Subsecretario de la Suprema Corte de justicia de la provincia de Buenos Aires.

Es muy auspicioso que todas las actividades se desarrollen en la Universidad Nacional de La Pampa, en esta moderna y cómoda sala, donde sesiona habitualmente el consejo superior. Expreso mi reconocimiento a la universidad pública de La Pampa por haber cedido generosamente sus espacios para que pueda reunirse el Foro Permanente.

Estoy ante un auditorio calificado, compuesto por titulares e integrantes de fiscalías, oficinas, áreas, secretarías, que se ocupan de la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Por ello, no vengo aquí a enseñar; vengo a compartir algunas reflexiones, teniendo en consideración las funciones de los órganos garantes.

Es oportuno iniciar este abordaje refiriéndome a una de las características distintivas de los derechos humanos: **la interdependencia**.

Así como los avances en materia de alimentación adecuada impactan favorablemente en el derecho a la educación, o el acceso al agua potable en la salud, creando a su vez buenas condiciones para llevar adelante una vida digna; y que también, en sentido inverso, los retrocesos impactan negativamente en el disfrute de derechos, lo mismo ocurre con la transparencia y la integridad.

Concretamente: si está garantizado el acceso a la información, si la sociedad conoce qué sucede, qué está haciendo o no está haciendo el Estado, en qué se invierte y cómo lo hacen quienes gestionan, esa sociedad será una sociedad empoderada para frenar el avance de las conductas corruptas, públicas y privadas.

Ahora bien, en todo el ecosistema de la transparencia y la integridad, debemos mirar con mucha atención el rol de los *órganos garantes*: aquellas instituciones encargadas de cumplir y hacer cumplir las normas que regulan estas temáticas.

Hay estándares que deben observarse para que puedan los órganos desempeñar adecuadamente su labor: por un lado, estar dotados de **independencia y autonomía**; y por otro lado, de **idoneidad y especialidad**.

Veamos en cada caso los estándares y recomendaciones.

Órganos garantes de la transparencia pública

Una referencia de enorme valor en el plano internacional es la *Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información 2.0*, elaborada por el Departamento de Derecho Internacional del Comité Jurídico Interamericano de la OEA y enriquecida con aportes de una multiplicidad de actores, gubernamentales, de la sociedad, de la academia, entre otros.

La Ley Modelo 2.0 no es la primera en esta materia: en 2010 surgió la Ley Modelo Interamericana originaria. Y diez años después, en lo que podríamos denominar un ejemplo de *desarrollo progresivo en derechos humanos*, se terminó de redactar la siguiente Ley Modelo, con más contenidos, más tutela y más protección del acceso a la información pública.

Con base en las líneas directrices que se aprecian en esta norma interamericana, los órganos garantes deben contar con *independencia y autonomía*. Por ejemplo, que al menos estén creados por ley; y agrego algo: que a la sanción de esa ley se arribe luego de un proceso de participación y deliberación suficientes, de modo que las organizaciones de la sociedad, las instituciones académicas, las personas interesadas, puedan contribuir a enriquecer los contenidos del proyecto, y que quienes tienen la responsabilidad de legislar debatan el proyecto, en comisiones y en el plenario de cada cámara, sin estar impulsados por lograr, rápidamente, en pocos días, su aprobación.

Estas leyes, una vez vigentes, se aplicarán por mucho tiempo y por ello requieren de consensos amplios, de escucha respetuosa y mucho diálogo.

La Ley Modelo 2.0 postula como recomendación, aunque no expresamente en su articulado, que los órganos garantes tengan jerarquía constitucional y no estén subordinados a los poderes públicos, para dar más fuerza a su independencia y autonomía.

Otro requisito aconsejable para fortalecer las cualidades de independencia y autonomía, es que la ubicación de los órganos garantes en el organigrama institucional del Estado sea acorde con la importancia de sus facultades y competencias.

Lo explico con más precisión. Si el órgano cuyas funciones son hacer saber a un sujeto obligado que la información que se negó a entregar debe efectivamente entregarla, o que está facultado para dictaminar en casos de incompatibilidades, o de conflictos de intereses que involucran a funcionarios, y esas personas a quienes les están diciendo: usted no ha cumplido, usted incurre en determinada conducta, usted no puede hacer eso, están jerárquicamente por encima del órgano y de la autoridad cuya labor es hacer que la ley se cumpla, existen riesgos de presiones -sutiles o explícitas- que pueden resultar perjudiciales para la calidad institucional de la república y para los valores que son esenciales en un Estado de derecho democrático.

En línea con lo antes señalado, deben existir garantías de estabilidad para quienes son autoridades de los órganos garantes por el mandato que fije la ley, y también debe asegurarse que no haya remociones arbitrarias, estableciéndose en las normas, de manera taxativa, qué circunstancias o qué conductas son causales para disponer apartar a esa autoridad de su cargo respetándose el debido proceso, con investigaciones objetivas y no armadas con el objetivo de desplazar a quien se convirtió, por las decisiones que toma en materia de transparencia e integridad, en una persona molesta para el poder.

Resulta fundamental para la independencia y autonomía que los órganos garantes puedan, por sí, formular su política presupuestaria y luego ejecutar el presupuesto. Este es un aspecto muy sensible. Si antes de que el presupuesto llegue al Congreso nacional, o a la Legislatura provincial o estadual, con la estimación de gastos en recursos humanos y materiales considerados adecuados, deben sortearse diferentes instancias de “visto bueno” o “revisión” con intervención del funcionariado que es al mismo tiempo sujeto obligado, pueden darse actitudes deliberadamente reticentes cuando haya iniciativas del órgano para fortalecer su estructura, adoptar medidas de modernización o de actualización tecnológica para un mejor funcionamiento, porque en esos casos, en general, se requiere disponer de más financiamiento.

Lo hasta aquí expresado sobre la potestad de formular el presupuesto y de luego ejecutarlo, no significa, corresponde remarcarlo, que los órganos garantes sean “islas” exentas de los deberes de transparencia activa y de los controles propios de cualquier estamento público; pero también hay que comprender que la tarea de los órganos es incómoda para el poder, independientemente de qué poder y de qué período gubernamental estemos analizando.

Asimismo, y no menos importante: los órganos deben tener capacidad sancionatoria cuando comprueben incumplimientos de los sujetos obligados e inclusive cuando haya conductas obstruccionistas del funcionariado responsable. Sin sanciones ejemplarizadoras, las actitudes consistentes en esquivar obligaciones legales, se convierten en algo normal.

Yendo a la *idoneidad y especialidad*, ambas exigen, primeramente, que quienes titularicen e integren los órganos garantes sean personas cuya formación y trayectoria estén consustanciadas con el cargo para el que son propuestas o designadas.

En este sentido, es siempre recomendable que los procesos de designación sean públicos; si es por concurso, para que no haya exclusiones a los fines de participar, de competir, y si no es por concurso, que la hoja de vida de las personas propuestas sea ampliamente difundida, que se abra un plazo para efectuar señalamientos (adhesiones, impugnaciones), y que en una audiencia pública la persona propuesta explique y responda preguntas sobre cuáles son sus lineamientos para llevar a cabo en el órgano garante.

La Ley Modelo 2.0 propone que quienes titularicen los órganos garantes sean cuerpos colegiados, de como mínimo 5 personas, respetando paridad entre los géneros -fundamental- y diversidad de procedencias (profesionales, académicas, por ejemplo) de las personas que serán designadas. Todo esto, sin lugar a duda, es inherente al requisito de la idoneidad.

La *especialidad* es indispensable: un órgano garante debe ser creado especialmente a los efectos de cumplir su rol. No puede resultar indiferente a quien legisla y sancionan leyes de acceso a la información pública o de integridad pública, que las funciones del órgano garante se “acoplen”, o se “agreguen” a

otro órgano -ya existente-, sobrecargando sus labores y probablemente resintiendo el desempeño general.

Si bien mi exposición pretende abordar estas temáticas con un alcance general, sin alusiones particulares, básicamente por razones de tiempo, hago un paréntesis para referirme a la provincia de La Pampa, por haberse sancionado recientemente, a fines de 2023, la primera ley de acceso a la información pública, n° 3571. Es un paso significativo en términos de institucionalidad democrática que ha dado La Pampa, desde ya, que espero sigan otras provincias actualmente sin normas de acceso a la información, como Formosa, San Juan y Tucumán.

Sin embargo, el órgano garante que crea la ley n° 3571 es uno que ya existe para cumplir trascendentales funciones: la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la FIA, que tiene a su cargo investigar conductas administrativas del funcionariado y del resto del personal estatal provincial, de los tres poderes, de entes y empresas del Estado y también del personal policial. Además, tiene bajo su órbita el registro de declaraciones juradas patrimoniales anuales de toda la provincia.

Por consiguiente, no es aconsejable, más allá de si hablamos sobre La Pampa, sobre la nación o sobre cualquiera otra jurisdicción, que un órgano con funciones de mucha relevancia institucional y variadas competencias ahora pase a cumplir otras funciones, ni más ni menos, que garantizando el acceso a la información y la transparencia pública de todo el Estado provincial.

Para que todo ello no afecte negativamente el desempeño de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, deberá crearse un área especial, con profesionales formados, capacitados y dedicados a esta temática, bajo supervisión de sus autoridades máximas.

La etapa inicial es crucial: implementar el derecho de acceso a la información pública en La Pampa, conforme las pautas marcadas por la ley n° 3571, teniendo como referencia la ley nacional n°27275, y siguiendo las directrices de la Ley Modelo Interamericana 2.0.

Sin exagerar es crucial, porque habrá que definir medidas, acciones y criterios de actuación para el momento en que comiencen a llegar reclamos por incumplimientos.

Claramente, nada de esto será posible sin refuerzos presupuestarios suficientes y sin una adecuada reglamentación de la ley, a cargo del Poder Ejecutivo, en la que sea tenida en cuenta sustancialmente, no como una mera formalidad, la opinión de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Lo mismo señalo para la Agencia de Acceso a la Información Pública, creada por la ley nacional, cuya tarea desde que comenzó a funcionar en 2017 hasta el presente ha sido muy fructífera, que deberá brindar todo el acompañamiento institucional a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, integrando además el Consejo Federal de Transparencia creado por la ley nacional n°27275.

Abordaré seguidamente un tema difícil para los órganos garantes: *las excepciones*. El acceso a la información no es un derecho absoluto, pero aquello que no corresponde informar o publicar debe estar mencionado expresamente en las normas, no con fórmulas genéricas, sino taxativamente; y si no debe informarse, los sujetos obligados tienen que argumentar por qué, en la resolución denegatoria.

La Ley Modelo 2.0 divide las excepciones en dos grandes grupos: la *información reservada*, que abarca aquella en la que están involucrados intereses públicos en materias como seguridad, defensa, relaciones exteriores, entre otras; y la *información confidencial*, que remite a la protección de intereses jurídicos personales, excluidos de su divulgación pública, como pueden ser los datos sensibles de personas, por su filiación política, su religión, su orientación sexual, su salud, etc.

Aquí cabe resaltar dos excepciones a las excepciones, que son indicadas por la Ley Modelo 2.0: nunca debe invocarse la excepción al deber de informar o publicar cuando se trate de *datos e información sobre graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en casos que investigan hechos de corrupción en los términos que define la Convención Interamericana contra la Corrupción*.

En ambas situaciones, la Ley Modelo 2.0 asigna a los órganos garantes la función de calificar, de manera directa si está resolviendo un reclamo, o por ejemplo mediante criterios de actuación general que sigan los sujetos obligados cuando reciban las solicitudes de información, para determinar cómo encuadrarlas en casos de graves violaciones de derechos humanos y/o en casos vinculados con actos de corrupción.

Es un posicionamiento de avanzada, y por eso lo menciono, que cuando la Ley Modelo 2.0 se refiere a derechos humanos para no invocar excepciones al deber de informar, establece además la obligación estatal de *preservar* -para que no sea destruida o alterada- y de *publicar* la documentación obrante en el marco de procesos de justicia transicional que ocurren en los países luego de etapas traumáticas por dictaduras, conflictos internos, etc. para asegurar a las víctimas y a la sociedad, verdad, justicia, reparación y no repetición de las violaciones acontecidas.

Órganos garantes de la integridad y la lucha contra la corrupción

Haré algunas referencias sobre ciertos recaudos para tener en cuenta en los órganos garantes que trabajan para garantizar la integridad pública y combatir la corrupción. Hay, como en materia de acceso a la información, faros que iluminan en el plano internacional y trazan una hoja de ruta: la Convención Interamericana contra la corrupción, la Convención de la ONU que es posterior a la Interamericana, y el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana, el *MESICIC*, que existe desde 2001.

En ese marco, está disponible información de mucho interés en el *Portal Anticorrupción de las Américas*, como por ejemplo la Guía de Propuestas Legislativas para órganos que son autoridad de aplicación en leyes de integridad, o en normas anticorrupción con competencias penal, pecuniaria, administrativa, patrimonial.

Las pautas allí detalladas coinciden en general con los lineamientos fijados para los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información: autonomía e independencia funcional; explicación precisa sobre los

procedimientos de designación -permanente o por períodos- y de remoción con garantías que impidan arbitrariedades; contar con recursos suficientes para funcionar; integrar el plantel de personas aplicando criterios de idoneidad, objetividad e independencia, entre otras.

En diciembre de 2019 se publicó una gran contribución del sistema Interamericano: los *Estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre corrupción y derechos humanos*, un documento de 209 páginas que esclarece sobre la relación entre corrupción y derechos humanos, por ejemplo, describiendo dos grandes factores que propician la corrupción.

Esos factores son:

Institucionales, cuando existen instituciones débiles, excesiva discrecionalidad del poder o escasos controles a la gestión pública; cuando la regla es la impunidad y los procesos abiertos no avanzan, o cuando la oposición, la prensa, las organizaciones de la sociedad y las personas en general no cuentan con garantías para denunciar, y sufren persecuciones, o se les aplican represalias.

Culturales, cuando, por ejemplo, en la sociedad se naturaliza, se tolera y se acepta silenciosamente la corrupción, cuando la “cultura de la ilegalidad” se instala y permea en diferentes ámbitos, e incluso cuando el electorado termina priorizando ciertos logros gubernamentales, de mejoras en la situación económica u otros, colocando en un segundo plano hechos de corrupción que involucran a quienes integran una gestión, independientemente de qué gestión se trate.

También estos estándares ponen el acento en la necesidad de que las investigaciones de hechos de corrupción sean objetivas, que se respete el debido proceso, que los juicios no se prolonguen indefinidamente, ni se conviertan, por su propio estado de indefinición, en una suerte de condena anticipada de las personas imputadas.

Argentina tiene en materia de órganos garantes de la integridad, asignaturas pendientes, porque rige todavía una ley de 1999. En la agenda pública nacional, no puede haber más postergaciones para presentar un

proyecto de ley de integridad pública, de ética pública, asumiendo que esto es transversal a todo el Estado, a todos los poderes.

Con base en experiencias internacionales, en informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en las recomendaciones efectuadas sobre Argentina en 2019, y en el informe de seguimiento de 2021, que son públicos, en el año 2022 la Oficina Anticorrupción llegó a elaborar un proyecto con un interesante proceso participativo previo, que siempre es bienvenido.

El proyecto fortalece el papel de los órganos garantes, que haya uno en cada poder, con mecanismos de publicidad e idoneidad para la designación de autoridades, con estabilidad en los cargos por los períodos que la ley define, con una enumeración taxativa de causales de remoción, y con autonomía funcional y presupuestaria.

Sin embargo, jamás tuvo estado parlamentario. Allí quedó, en 2022, sin que el Poder Ejecutivo lo impulse. Urge entonces, avanzar para que Argentina debata una nueva ley de integridad pública, que abarque todo el Estado.

Casos emblemáticos del sistema interamericano

Comparto con ustedes, brevemente, algunos casos emblemáticos en el ámbito latinoamericano, que conectan con transparencia, con lucha contra la corrupción, y con los órganos garantes y/o de investigación y juzgamiento.

Comienzo por la situación mexicana. La Licenciada San Martín Rebollo, quien me precedió en el uso de la palabra explicando muy didácticamente estos temas, por su experiencia al haber integrado en carácter de Comisionada el órgano garante de Ciudad de México, señaló que el órgano garante nacional de su país, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está atravesando un delicado momento.

Coincido, y amplío: esto ocurre porque el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador dispuso un plan de obras de infraestructura, entre ellas el corredor interoceánico “Tren Maya”, calificadas como de seguridad nacional. Volviendo a la explicación sobre el régimen de excepciones, recordemos que la información

es reservada si hay motivos de seguridad nacional: el Estado puede no publicar, o no entregar información si alguien lo requiere, invocando esta causal y explicando las razones.

Luego que actuó el INAI, pronunciándose en favor del acceso a la información como regla principal, se desató un inédito conflicto: fueron terminando los mandatos de algunos comisionados, que en México duran 7 años, uno más que el mandato del presidente de la república, de 6 años, y esas vacantes -tres de siete comisionados en total- que para su designación deben contar con la intervención del Poder Legislativo, del Senado, con mayorías calificadas, y del Poder Ejecutivo, no fueron cubiertas.

Podría pensarse: son 7 comisionados, se fueron 3, pero quedan 4, que son mayoría. Pues no, porque para sesionar válidamente y tomar decisiones, el INAI necesita 5 comisionados, una mayoría superior a la mitad más uno.

Lo que sobrevino fue el apagón del INAI como órgano garante desde 2023: con 4 comisionados no podía sesionar ni resolver reclamos, que fueron acumulándose. La Suprema Corte mexicana resolvió en 2023 que sesione con 4 integrantes hasta que vuelva la normalidad, pero no deja de ser una situación de extrema gravedad institucional en la que el poder político, molesto porque lo obligan a cumplir con principios elementales de transparencia y acceso a la información, ambos muy buenos antídotos contra la corrupción, arremete contra el órgano garante -que además, en México, vale resaltarlo, tiene jerarquía constitucional- lo desintegra para que no funcione y hasta se plantea si debe existir un órgano de esas características, por excesivamente oneroso.

El caso mexicano nos lleva a reflexionar sobre cómo funcionan los sistemas de acceso a la información pública en los países. Si hubiera en la información o en los datos solicitados, algún contenido que el Estado entiende inconveniente difundir, pensando en la obra de la magnitud del Tren Maya, por ejemplo, algún dato específico sobre la traza, o sobre determinados detalles constructivos, que siendo divulgados podrían causar un posible atentado, esos datos -con una decisión fundamentada- se tachan, pero el resto de la información se entrega: los gastos proyectados y ejecutados, los plazos estipulados, el grado de cumplimiento de las empresas contratistas y su relacionamiento con el

Estado, por tratarse de una obra pública financiada con recursos públicos, son, indudablemente, asuntos de interés público.

Comparto con ustedes *dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, llamando la atención sobre las persecuciones a quienes denuncian presuntos hechos de corrupción: el caso *Alvarez Ramos, Tulio v. Venezuela*, sentenciado en 2019, con motivo del procesamiento y condena a un periodista por difamación agravada, con accesoria de inhabilitación política y hasta una restricción para salir de su país, luego de haber publicado una nota de opinión en 2003 sobre un presunto desvío de recursos de la caja de previsión social para trabajadores de la Asamblea Nacional de Venezuela.

La Corte sostuvo en un pasaje de la sentencia que no puede usarse la ley penal para castigar a alguien que está denunciando, en un medio de comunicación como en este caso, o en otros ámbitos, supuestos hechos de corrupción o abuso de autoridad. El mensaje que transmite la sanción penal, en definitiva, no es solamente para el Sr. Alvarez Ramos, sino para todas las personas que de ahora en adelante intenten denunciar o ejercer la libertad de expresión criticando decisiones estatales, que sepan que serán procesadas penalmente, condenadas, inhabilitadas.

El otro fallo es más reciente: de noviembre de 2023, notificado por la Corte IDH en marzo de 2024. Es el caso *Viteri Ungaretti, Julio Rogelio v. Ecuador*. Aquí el tribunal atribuye responsabilidad al Estado ecuatoriano por todo lo que padeció el Sr. Viteri Ungaretti, un marino, agregado naval de su país en Gran Bretaña, quien denunció presuntas maniobras de corrupción en las fuerzas armadas de su país.

Lo que sobrevino a la denuncia fue su detención arbitraria dispuesta por autoridades militares, el hostigamiento hacia su esposa e hijos y también hacia la madre de su esposa, y la persecución que él mismo sufrió en la Armada donde prestaba servicios, afectando su estabilidad laboral, hasta que finalmente, con el grado de capitán de navío, pidió la baja de la fuerza.

La Corte Interamericana llamó la atención sobre la falta de mecanismos institucionales adecuados para presentar denuncias sobre corrupción, de modo

que las personas denunciadas, y otras como pueden ser testigos, cuenten con protección de su vida e integridad personal, y de su libertad.

En el mismo sentido, el tribunal hace un señalamiento firme sobre la libertad de expresión de todas las personas, por ejemplo, en asuntos de interés público, que si no está garantizada debilita la democracia.

El siguiente caso que comparto, nos toca de cerca como argentinos: es el caso derivado del *terrible atentado contra la AMIA*, que dio lugar a una presentación del colectivo Memoria Activa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a un reconocimiento de responsabilidad del Estado y posterior Acuerdo de Solución Amistosa en el ámbito de la Comisión, en el año 2005, y a cumplimientos e incumplimientos de los compromisos asumidos.

Un dato alarmante sobre este atentado, que a 30 años de ocurrido permanece impune y costó la vida de 85 personas, fue la falta de transparencia en el uso de fondos reservados del sistema de inteligencia, y por ende exentos del deber de información pública y de rendición de cuentas. Se asignaron 400.000 dólares de la por entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, que dependía, como históricamente fue, y hoy también lo es la Agencia Federal de Inteligencia, directamente del presidente de la nación -en ese momento, 1996, era Carlos Menem- para desviar la investigación y acusar falsamente a policías de la provincia de Buenos Aires.

La Corte Interamericana tiene el caso del atentado contra la AMIA desde 2021, en virtud de una rigurosa tarea desplegada por la Comisión Interamericana y el ineludible compromiso de quienes representan a las víctimas. En noviembre de 2022 se sustanciaron los alegatos finales ante la Corte, cuando el tribunal regional sesionó en Uruguay, de modo que solo resta que se emita la sentencia.

Hay un último caso para comentar. Es un muy reciente pronunciamiento de la *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*, del 14 de mayo de 2024, *sobre Ecuador*, con base en presentaciones realizadas por la fiscalía general de ese Estado, que alertó sobre actitudes de organizaciones criminales, específicamente comprando voluntades, sobornando a quienes tienen responsabilidades de investigar y juzgar delitos.

La larga lista de conductas reprochables estremece: frenar causas, sentenciar beneficiando a miembros de estas organizaciones, recibir tratos diferenciados en el sistema carcelario, hasta incluso lograr que los órganos juzgadores sean modificados en su integración para asegurar resultados favorables en los juicios contra estas bandas criminales.

Lo que la Comisión Interamericana advierte ahora sobre Ecuador, puede extenderse a cualquier Estado de la región en el futuro: es necesario contar con unidades especializadas con capacidades reales de actuar en las denuncias que reciben: investigar, avanzar y esclarecer hechos de corrupción; y agrega algo primordial: que esas unidades, o como se denominen en cada país, dispongan de recursos para su tarea, cuenten con personas preparadas y con equipamiento tecnológico; también menciona la remuneración, esto es que la exigente y riesgosa labor de investigar corrupción y los demás delitos en general, esté adecuadamente remunerada; y que exista, de manera permanente, una estrategia de capacitación para mejorar su desempeño.

Palabras finales

Las palabras de cierre son para reafirmar lo expresado en el inicio de esta exposición: hay interdependencia entre las políticas de transparencia pública y las políticas de combate a la corrupción. Si se registran avances en ambas, esto impactará favorablemente, no habrá opacidad, la sociedad estará informada y las prácticas corruptas disminuirán; y si la corrupción continúa ocurriendo, el sistema de investigaciones y juzgamiento debe funcionar correctamente para esclarecer los hechos, conocer la verdad y evitar que triunfe la impunidad, respetando en todos los casos el debido proceso.

También hay que explorar, o fortalecer si ya existieran, canales de diálogo institucional entre los órganos garantes de la transparencia, de la integridad y de la lucha contra la corrupción. Es lo que podría denominarse, en el método de interpretación de la ciencia jurídica de los derechos humanos -la perspectiva pro-persona- una *fertilización cruzada*, para intercambiar experiencias y nutrirse

mutuamente de las producciones jurídicas y decisiones adoptadas por esos órganos.

Asimismo, hay algo que siempre procuro enfatizar, para poner en práctica: la educación formal e informal. Todas las personas en nuestro país, en todos los niveles, deben recibir formación para entender la importancia de la transparencia pública, de la ética pública y de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, para que esas personas crezcan desde la niñez guiadas por esos valores.

Esta política pública educativa debe proyectarse con más fuerza al ámbito universitario: a todas las carreras, a todas las disciplinas, y no como muchas veces erróneamente se piensa, solo a la abogacía o a la ciencia política. Buena parte de la dirigencia designada en diversas áreas gubernamentales, como la salud, la educación, la economía y las finanzas, la infraestructura y las obras públicas, las políticas sociales, el ambiente, la seguridad interior, la defensa, entre otras, ha pasado por las universidades.

El mensaje final que les dejo es: unidos, renovemos en este Foro Permanente, aquí en La Pampa, el compromiso por un país con más transparencia e integridad, con mejor calidad institucional y con menos injusticias.

Muchas gracias.

Enlaces de interés:

Ley Modelo Interamericana 2.0 de Acceso a la Información Pública

https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicacion_Ley_Modelo_Interamericana_2_0_sobre_Acceso_Informacion_Publica.pdf

Portal Anticorrupción de las Américas

<https://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/>

Caso Alvarez Ramos v. Venezuela

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_380_esp.pdf

Caso Viteri Ungaretti v. Ecuador

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_510_esp.pdf

Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la injerencia del crimen organizado en el sistema judicial de Ecuador

<https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/100.asp>

Estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre corrupción y derechos humanos

<https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf>